

Solicitud Audiencia de Conciliación Prejudicial

4 mensajes

Leonardo Lopez <susolucionlaboral.net@gmail.com>

27 de abril de 2022, 16:14

Para: conciliacionadvpereira@procuraduria.gov.co, contactenos@alcala-valle.gov.co, despacho@alcala-valle.gov.co, acuavalle@acuavalle.gov.co

Señores

PROCURADURÍA JUDICIAL DELEGADA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PROCURADURÍA 211 JUDICIAL I.
PEREIRA RDA.

Referencia: Solicitud Audiencia de Conciliación Prejudicial

Convocantes: RUBEN DARIO VELEZ VILLEGAS, IVAN VELEZ VILLEGAS Y MAURICIO VELEZ VILLEGAS.

Convocados:

- SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
- MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE, representado legalmente por la señora Alcaldesa Gloria Estella Raigoza o quien haga sus veces.

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

LEONARDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.496.999, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 151.551 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de los señores RUBEN DARIO VELEZ VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.006.021, MAURICIO VELEZ VILLEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.563.693 e IVAN VELEZ VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.496.783, conforme a lo poderes anexos que se acompaña con esta solicitud, respetuosamente comparezco ante su despacho de conformidad con lo indicado en la ley 23 del 1991, Decretos 171 y 173 de 1993, ley 446 de 1996, Decreto 1716 de 2009 y el capítulo 3 de la sección 1 del Decreto Único Reglamentario 1069 del 2015 y demás normas que complementarias, para que lleve a cabo CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA teniendo como convocados a la SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. - E.S.P. identificada con NIT No. 890399032-8, representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ CERÓN o quien haga sus veces y al MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE, representado legalmente por la señora Alcaldesa Gloria Estella Raigoza o quien haga sus veces; como requisito de procedibilidad del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA, tendiente a reparar los daños y perjuicios causados al bien inmueble de propiedad de mis poderdantes denominada FINCA LA GRANADILLA, ubicado en el municipio de Alcalá- Valle del Cauca, identificado con código catastral No. 76020-00-00-0010-0030-000, matrícula inmobiliaria No. 375-24611, para efectos de lo anterior anexo dos archivos en PDF.

De igual forma, esta solicitud es enviada conjuntamente a los convocados a los respectivos correos electrónicos institucionales.

Atentamente,



SU SOLUCIÓN LABORAL S.A.S
Calle 21 Nro. 16-46 Of. 605 Edf. Torre Colseguros
Cel: 3116080197 Tel: 7343664
Armenia - Quindío

3 adjuntos

 SOLICITUD DE CONCILIACIÓN ACUAVALLE S.A. E.S.P. RUBEN VELEZ .pdf
497K PRUEBAS -VELEZ.pdf
12639K CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION.pdf
253K

Señores

**PROCURADURIA JUDICIAL DELEGADA PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS PROCURADURIA 211 JUDICIAL I.
PEREIRA RDA.**

Referencia: Solicitud Audiencia de Conciliación Prejudicial

**Convocantes: RUBEN DARIO VELEZ VILLEGAS, IVAN VELEZ
VILLEGAS Y MAURICIO VELEZ VILLEGAS.**

**Convocados: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A. – E.S.P.**

**MUNICIPIO DE ALCALA VALLE, representado
legalmente por la señora Alcaldesa Gloria Estella
Raigoza o quien haga sus veces.**

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

LEONARDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.496.999, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 151.551 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de los señores **RUBEN DARIO VELEZ VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.008.021, **MAURICIO VELEZ VILLEGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.563.693 e **IVAN VELEZ VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.496.783, conforme a lo poderes anexos que se acompaña con esta solicitud, respetuosamente comparezco ante su despacho de conformidad con lo indicado en la ley 23 del 1991, Decretos 171 y 173 de 1993, ley 446 de 1998, Decreto 1716 de 2009 y el capítulo 3 de la sección 1 del Decreto Único Reglamentario 1069 del 2015 y demás normas que complementarias, para que lleve a cabo **CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA** teniendo como convocados a la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. – E.S.P.**, identificada con NIT No. 890399032-8, representada legalmente por el señor **JORGE ENRIQUE SÀNCHEZ CERÒN** o quien haga sus veces y al **MUNICIPIO DE ALCALA VALLE**, representado legalmente por la señora Alcaldesa Gloria Estella Raigoza o quien haga sus veces; como requisito de procedibilidad del medio de control de

REPARACIÓN DIRECTA, tendiente a reparar los daños y perjuicios causados al bien inmueble de propiedad de mis poderdantes denominada **FINCA LA GRANADILLA**, ubicado en el municipio de Alcalá- Valle del Cauca, identificado con código catastral No. 76020-00-00-0010-0030-000, matrícula inmobiliaria No. 375-24611, teniendo en cuenta lo siguiente:

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

PARTE CONVOCANTE:

- **RUBEN DARIO VELEZ VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.008.021.
- **MAURICIO VELEZ VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.693.
- **IVAN VELEZ VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.496.783.

APODERADO:

- **LEONARDO LÓPEZ GUTIÉRREZ**, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.496.999, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 151.551 del Consejo Superior de la Judicatura.

PARTE CONVOCADA:

- **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. – E.S.P.**, identificada con NIT No. 890399032-8, representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE SÀNCHEZ CERÒN.
- **MUNICIPIO DE ALCALA VALLE**, representado legalmente por la señora Alcaldesa Gloria Estella Raigoza o quien haga sus veces.

MEDIOS DE CONTROL QUE SE PRETENDE INTERPONER EN CASO DE DECLARARSE FALLIDA LA CONCILIACIÓN

En caso de fracasar la presente solicitud de conciliación, el medio de control que se prende interponer es el de **REPARACIÓN DIRECTA**, de conformidad con el artículo 140 de la ley 1437 de 2011, puesto que la demanda se basa en los daños y perjuicios causados por una entidad de estatal, a causa de la ocupación permanente con tuberías de transporte de aguas al interior del bien inmueble denominado Finca la Granadilla ubicada en el municipio de Alcalá Valle del Cauca., y por la ruptura de un tramo de dicha tubería de conducción de agua perteneciente a ACUAVALLE S.A. – E.S.P, donde se ocasionó un derrame de agua que causó un proceso de erosión y socavación de gran magnitud, generando un movimiento de tierra en masa de aproximadamente 1.700 m², lo cual ha generado pérdidas y la inutilidad del terreno afectado, además de intensificarse el daño con las temporadas intensas de invierno puesto que la erosión del terreno es cada vez más pronunciada dejando un terreno no apto para pastos y cultivos, que era su uso habitual antes del incidente.

OPORTUNIDAD DE LA PRESENTE SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

Es de resaltar que la presente solicitud de conciliación administrativa, está dentro del término de caducidad de 2 años contados a partir del día siguiente de la acción u omisión que generó el daño, de acuerdo con el literal i numeral 2 del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, puesto que el daño se causó el pasado 22 de agosto de 2020, concluyendo el término para interponer la demanda es el 22 de agosto de 2022.

FÓRMULAS DE ARREGLO CONCILIATORIO

En la medida en que a los convocantes se les ha causado daños y perjuicios materiales, a causa de la ocupación permanente del bien inmueble denominado Finca la Granadilla por la entidad estatal, y de conformidad con los hechos que se expondrán, solicito al señor procurador que previo reconocimiento de mi personería para actuar como apoderado de la parte convocante, se cite y haga comparecer a la convocada con el fin de llegar a una solución respecto de los siguientes puntos:

Primero: Se DECLARE que la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. – E.S.P** y el **municipio de ALCALA VALLE**, son administrativamente responsables y deben responder patrimonialmente por todos los perjuicios

ocasionados a los señores RUBEN DARIO VELEZ VILLEGAS, IVAN VELEZ VILLEGAS Y MAURICIO VELEZ VILLEGAS, derivados de los daños ocasionados desde el pasado 22 de agosto de 2020, a causa del avería de una tubería de conducción de agua perteneciente a ACUAVALLE S.A. – E.S.P, y al municipio de ALCALA VALLE que ocasionó un derrame de agua que causó un proceso de erosión y socavación de gran magnitud, generando un movimiento de tierra en masa de aproximadamente 1.700 m2, situación que ha generado pérdidas y la inutilidad del terreno afectado, además de intensificarse el daño con las temporadas intensas de invierno puesto que la erosión del terreno es cada vez más pronunciada dejando un terreno no apto para pastos y cultivos, que era su uso habitual antes del incidente.

Segundo: Se DECLARE que la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. – E.S.P** y el municipio de **ALCALA VALLE** son administrativamente responsables y deben de responder por el valor del terreno ocupado de forma permanente e irregular, por el acueducto de su propiedad y del cual sus tuberías de transporte de aguas están dentro de los terrenos de mis patrocinados ocupando un área de 600 mts cuadrados de dicha propiedad privada.

Segundo: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, y en apoyo de los artículos 1613¹ y 1614² del Código Civil, se pretende que las entidades convocadas reconozcan el pago a título de indemnización a los propietarios del predio denominado FINCA LA GRANADILLA, los señores RUBEN DARIO VELEZ VILLEGAS, IVAN VELEZ VILLEGAS Y MAURICIO VELEZ VILLEGAS las siguientes sumas de dinero, por los siguientes conceptos:

1. Perjuicios materiales. Daños ruptura de Tubería:

1.1 Daño emergente: Tasado en la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$69.641.000.00)**; en razón hechos y daños ocasionados a causa de la ruptura de una tubería de conducción de aguas de propiedad de la

¹ La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente.

² Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.

accionada que se encuentra dentro de la propiedad privada del bien inmueble denominado Finca la Granadilla, donde se debe tener en cuenta que de conformidad con las recomendaciones técnicas, en el área afectada es obligatorio y necesario realizar algunas **obras para mitigar el riesgo que fue creado por la ruptura de la tubería** y la erosión ocasionada; obras de mitigación que se determinan de forma exacta y concreta en el informe realizado por un perito profesional ingeniero civil Alfredo Álvarez López, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.523.441, con tarjeta profesional No. 63202-1600 que se anexa a esta petición.

En dicha tubería de conducción de agua perteneciente a ACUAVALLE S.A. – E.S.P, y al municipio de Alcalá Valle, al parecer por falta de mantenimiento se ocasionó un derrame de agua que causó un proceso de erosión y socavación de gran magnitud, generando un movimiento de tierra en masa de aproximadamente 1.700 m², de los cuales ha generado pérdidas y la inutilidad del terreno afectado, además de intensificarse el daño con las temporadas intensas de invierno puesto que la erosión del terreno es cada vez más pronunciada dejando un terreno no apto para pastos y cultivos, que era su uso habitual antes del incidente.

1.2 Lucro cesante: Se podrá indicar que teniendo en cuenta que el área afectada es realmente equivalente a la suma de metros del paso de la tubería del agua en este sector afectado, misma que corresponde a 1,875 cuadradas, y dicha área se hace imposible de explotar en su mayoría, dados los riesgos, se puede indicar que el lucro cesante asciende a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000.00)**.

1.3 Indemnización por imposición de servidumbre. Art. 923 C. Civil: Tasada en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000.00)** suma que se debe reconocer legalmente por el precio del terreno ocupado de manera irregular por el acueducto, el cual es de 600 metros cuadrados, conforme lo indica el artículo 923 Código Civil y el concepto sobre el asunto numero 175 de 2014 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios³. Por lo anterior se solicita que se

³ La anterior disposición, concordante con diversas preceptivas contenidas en la Ley [142](#) de 1994, así como con las previsiones constitucionales relacionadas con la función social de la propiedad, permiten que las empresas prestadoras de servicios públicos, puedan pasar por predios ajenos siempre y cuando ello resulte necesario para la

reconozca por concepto de indemnización por las ***afectaciones, incomodidades y perjuicios*** por los hechos y daños ocasionados a causa de la ocupación permanente de la servidumbre de conducción de aguas al interior del bien inmueble denominado Finca la Granadilla de propiedad de mis representados.

Tercero: En caso de llegar a un acuerdo conciliatorio las entidades convocadas DARÁN cumplimiento al acta de conciliación expedida por el Procurador dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma, de acuerdo a lo reglado en el artículo 14 de la ley 640 de 2001, modificada por la ley 1285 de 2009.

Cuarto: Las sumas de dinero reconocidas en el acta de conciliación devengaran intereses comerciales durante los seis meses siguientes al fallo que homologue el acuerdo conciliatorio, y moratorios al vencimiento de dicho término hasta que se pruebe el pago real y efectivo.

Quinto: Al acta respectiva, los convocados DARÁN cumplimiento en los términos estipulados en la ley 1437 de 2011, artículo 192 y 195, y el pago de gastos procesales, costas y agencias en derecho y se le confiera mérito ejecutivo.

Estos cálculos deberán actualizarse e indexarse hasta la fecha efectiva de dicho reconocimiento económico a favor del convocante.

HECHOS

Primero: La finca denominada La Granadilla, de propiedad de mis representados, señores **RUBEN DARIO VELEZ VILLEGAS, IVAN VELEZ VILLEGAS Y MAURICIO VELEZ VILLEGAS**, se encuentra ubicada en el municipio de Alcalá Valle del Cauca, según información del certificado de tradición número 375-24611.

Segundo: Sobre el mencionado predio se encuentra instalada una tubería de conducción de aguas perteneciente a la empresa **ACUAVALLE S.A. – E.S.P.**, y al municipio de **ALCALA VALLE**, tubería que atraviesa parte del predio de mis mandantes en un área de 600 metros cuadrados.

prestación del servicio público, y se proteja al propietario afectado a través del pago de una indemnización por las incomodidades y perjuicios que la imposición de la servidumbre ocasione.

Tercero: El pasado 22 de agosto de 2020 se presentó la ruptura de un tramo de la mencionada tubería, donde se ocasionó un derrame de agua que causó un proceso de erosión y socavación de gran magnitud, generando un movimiento de tierra en masa de aproximadamente 1.700 m².

Cuarto: Como perjuicios se tiene, que, con el daño de la tubería, se han generado, además de las pérdidas y la inutilidad del terreno afectado; se concluye que con las temporadas intensas de invierno que se observan en este momento y que cada vez se hacen más pronunciadas el terreno afectado de forma directa no quedó apto para pastos y cultivos, que era su uso habitual antes del incidente, pues de acuerdo a los conceptos técnicos en cualquier momento este terreno puede volver a colapsar.

La recomendación de las autoridades ambientales y de los profesionales contratados para el estudio del terreno han sido las siguientes.

RECOMENDACIONES:

- *“Modificar el uso y manejo del suelo en el sector de alta ladera, variándolo hacia una vegetación protectora, para así evitar que condiciones presentadas en la zona como las altas y moderadas pendientes y la presencia de suelos con poca cohesión se conviertan en factores naturales que aumenten la posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa en temporadas de altas precipitaciones o filtraciones de la tubería existente.*
- *Es necesario aislar la zona afectada construyendo un cerco alrededor de la misma, ya que es importante facilitar la regeneración natural de la vegetación y evitar cualquier tipo de intervención sobre esta área.*
- *Teniendo en cuenta la magnitud de posibles movimientos en masa, es necesario realizar continuos monitoreos de los agrietamientos del terreno en la parte superior de la ladera.*
- *Determinar acciones mediante las cuales se puedan prevenir, controlar, minimizar o compensar los efectos negativos que se generaron con la disposición del material suelto generado por la erosión causada y que permanece sobre la ladera del área afectada, tales como posible arrastre del citado material por causa de aguas lluvias sobre el cauce natural existente.*

- *Para manejo del fenómeno, establecer actividades de bioingeniería que logren en el tiempo estabilizar el terreno comprometido.”*

Quinto: Es hecho que el cumplimiento de las recomendaciones antes indicadas, se hace necesario realizar un gasto de tipo económico, donde lo más preocupante es que dicho gasto no genera productividad alguna, pues solo para prevenir un riesgo más alto en daños a la propiedad, por la debilitación del terreno causado por la ruptura de la tubería. Lo anterior teniendo en cuenta, que, como ya se indicó, dichos terrenos ya no son aptos de ningún uso, dado el riesgo que se corre.

Sexto: De conformidad con los estudios realizados al terreno afectado, se tienen las siguientes conclusiones determinadas por profesionales ingenieros, estudio que se allega completo con esta solicitud. Las conclusiones fueron:

“Teniendo en cuenta la longitud de tubería que pasa por el predio La Granadilla en zona de ladera con bastante pendiente, la cual ya generó un evento erosivo de bastante magnitud y que a futuro, por las condiciones mismas de topografía y uso actual como es el de potreros para cría de ganado o especie similar, se recomienda el cambio de uso para prevenir futuros sucesos similares, se observa un área afectada que queda con limitaciones futuras por el paso actual de la tubería, la cual es de aproximadamente 12.000 m² , que corresponden a 150,0 metros de tramo de tubería por 80,0 metros de ladera de pendiente pronunciada que se ven afectados por el paso de la citada tubería. Más adelante se muestra el valor de esta porción de terreno que hace parte del predio La Granadilla.

Como se recomienda modificar el uso y manejo del suelo en el sector afectado, variándolo hacia una vegetación protectora, se sugiere además la construcción de algunas obras de bioingeniería que más adelante se detallan.”

Séptimo: Teniendo en cuenta lo indicado en los hechos anteriores, se debe indicar que tal situación a devenido en daños patrimoniales, los cuales se debe entrar a cuantificar, como lo es el valor del área afectada, la cual se hace imposible aprovechar, concretándose en este asunto un **daño emergente** estimado que de conformidad con las recomendaciones técnicas, en el área afectada es obligatorio y necesario realizar algunas obras para mitigar el riesgo que fue creado por la ruptura de la tubería y la erosión ocasionada, obras de mitigación que se determinan de forma exacta y concreta en el informe realizado por un perito profesional, teniendo dichas obras de mitigación del riesgo un valor

aproximado de **SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$69.641.000.00).**

Frente al **lucro cesante**, se podrá indicar que teniendo en cuenta que el área afectada es realmente equivalente a la suma de metros del paso de la tubería del agua, misma que corresponde a 1,875 cuadras, y dicha área se hace imposible de explotar en su mayoría, dados los riesgos, se puede indicar que el lucro cesante asciende a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000.00).**

Octavo: ACUAVALLE S.A. – E.S.P., a pesar de varias solicitudes de los propietarios de la finca La Granadilla, que vienen según ellos indican, hace aproximadamente seis años, la reclamada no ha compensado a dichos propietarios por la servidumbre en su predio sirviente y no han pagado un precio por el terreno ocupado por las tuberías de dicho acueducto, conforme lo indica el artículo 923 Código Civil, y los conceptos emitidos por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. El valor estimado y legal de esta indemnización se ha tasado conforme el valor actual del metro cuadrado en la propiedad, teniendo en cuenta su ubicación, cercanía a la ciudad, uso de suelo y valor actual en el mercado por la suma **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000.00)** suma que se debe reconocer por terreno ocupado, el cual es de 600 metros cuadrados a un valor de \$40.000.00 pesos metro cuadrado. 0

Noveno: En este orden de ideas, teniendo en cuenta los hechos generadores de responsabilidad, daños y perjuicios causados a los demandantes, se concluye la responsabilidad por parte de las entidades demandadas y/o convocadas y por consiguiente la relación de causalidad, por cuanto dichos daños y perjuicios se han ocasionado derivada la instalación dentro de la propiedad privada, finca de los convocantes y falta de mantenimiento de la tubería de conducción de aguas potables de propiedad de ACUAVALLE S.A. – E.S.P. y del **municipio de ALCALA VALLE.**

Decimo: El pasado 17 de junio del 2021 se allegó ante la entidad aquí convocada derecho de petición, manifestando los hechos y las pretensiones anteriormente mencionados, más la entidad no dio respuesta concreta alguna.

Décimo Primero: En vista que hasta la fecha no han sido resarcidos los perjuicios ocasionados a mis representados, por los hechos y daños ocasionados a causa de la ocupación permanente del bien inmueble denominado Finca la

Granadilla por la una tubería de conducción de agua perteneciente a ACUAVALLE S.A. – E.S.P, y **municipio de ALCALA VALLE**, se utiliza este mecanismo alternativo de solución de conflictos, para llegar a un acuerdo respecto de los daño y perjuicios ocasionados por la convocada, que de no salir avante, será como requisito de procedibilidad a efectos de iniciar la respectiva demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y JURISPRUDENCIAL

Se fundamenta la presente solicitud en los artículos 1 y 90 de Política, artículos 140 y 161 del C.P.A.C.A, ley 23 del 1991, Decretos 171 y 173 de 1993, ley 446 de 1998, Decreto 1716 de 2009 y el capítulo 3 de la sección 1 del Decreto Único Reglamentario 1069 del 2021⁵, artículos 923 y ss del Código Civil y concepto 175 de 2014 de la Superintendencia de Servicios Público.

Responsabilidad patrimonial del Estado.

En primer lugar, es preciso señalar que el artículo 90 de la Constitución Política⁴, y el artículo 140 de la ley Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo⁵, consagran que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, en efecto, la responsabilidad del Estado se hace evidente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

De acuerdo jurisprudencia del Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero. Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño

⁴ El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

⁵ **REPARACIÓN DIRECTA.** En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

antijurídico y su imputación a la administración, esto es, el componente que "permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos.

Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas).

Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio, es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público.

De los presupuestos para reclamar reparación al Estado por daños causados a bienes de propiedad privada como consecuencia de la falla en el servicio por omisión. El derecho a la propiedad privada y el ejercicio libre y tranquilo de sus atributos, se constituye como una base inalterable del estado moderno, de tal forma que su titular esté facultado para usar, gozar y disponer del bien sin más limitaciones que las que establezcan la ley, el derecho ajeno y el interés público, tal como lo disponen los artículos 58 de la Constitución Política⁶ y 669 del Código Civil⁷. En ese sentido, el Estado a través de las autoridades públicas, tiene el deber constitucional de respetar y proteger el derecho real de dominio sobre toda clase de bienes, razón por la cual, hay lugar al surgimiento de responsabilidad cuando el derecho a la propiedad resulte afectado o mermado como consecuencia de una omisión por parte de un agente estatal, en el cumplimiento de sus funciones.

Al respecto, el Consejo de Estado ha considerado como regla general, que el título de imputación de responsabilidad del Estado en estos eventos, **es el de falla en el servicio**. Así lo precisó la Subsección "C" de la Sección Tercera, con ponencia

⁶ **Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores**. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social

⁷ El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, **para gozar y disponer de ella** no siendo contra ley o contra derecho ajeno.

del Consejero Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente con radicación No. 73001233100019990053901 (22464), en sentencia de 10 de febrero de 2012, en los siguientes términos: "La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en casos como el que es objeto de estudio en el presente proveído, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños **en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido.**

En este sentido, se ha sostenido que. - En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una **FALLA EN EL SERVICIO.**

Por otra parte, el concepto 175 de 2014 emitido por la Superintendencia Servicios Públicos, manifiesta y ratifica el derecho que tiene los propietarios de un bien privado a una indemnización cuando estos son sometidos a un gravamen de servidumbre, pues si bien es cierto, la propiedad privada tiene una función social según nuestra constitución, esto no quiere decir que el o los propietarios de dichos bienes tengan que soportar los daños y perjuicios causados ya sea por acción o por omisión de las entidades que prestan un servicio público domiciliario, es por ello que consigna lo siguiente: (...) *La anterior disposición, concordante con diversas preceptivas contenidas en la Ley [142](#) de 1994, así como con las previsiones constitucionales relacionadas con la función social de la propiedad, permiten que las empresas prestadoras de servicios públicos, puedan pasar por predios ajenos siempre y cuando ello resulte necesario para la prestación del servicio público, **y se proteja al propietario afectado a través del pago de una indemnización por las incomodidades y perjuicios que la imposición de la servidumbre ocasione.*** (...) *Así las cosas, ha de considerarse que las empresas de servicios públicos están facultadas para promover la imposición de las servidumbres que requieran en su operación, ante la entidad pública o el juez competente.*

En efecto y con relación a la servidumbre de acueducto, el Artículo [919](#) del Código Civil, dispone lo siguiente:

“...toda heredad está sujeta a servidumbre de acueducto a favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o a favor de un pueblo que las haya menester para el servicio doméstico de los habitantes, o a favor de un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus máquinas. (...) Esta servidumbre consiste en que pueden conducirse las aguas por la heredad sirviente, a expensas del interesado...”

Respecto a los derechos del propietario del predio sirviente, en caso de servidumbre, el Artículo 923 del mismo código, señala lo siguiente: “El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le pague el precio de todo el terreno que fuere ocupado por el acueducto; el de un espacio a cada uno de los costados, que no bajará de un metro de anchura en toda la extensión de su curso, y podrá ser mayor por convenio de las partes, o por disposición del juez, cuando las circunstancias lo exigieren; y un diez por ciento más sobre la suma total. Tendrá, además, derecho para que le indemnice de todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto y por sus filtraciones y derrames que puedan imputarse a defectos de construcción”.

Tal normativa, en su Artículo 33, faculta a quienes prestan servicios públicos para promover la constitución de las servidumbres que se requieran en la prestación de éstos, pero señala que “... estarán sujetos al control en la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos”.

*Por su parte, la Ley 142 de 1994, en su Artículo 57, otorga a los prestadores la facultad de pasar por predios ajenos las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran; remover cultivos y obstáculos de toda clase que se encuentren; transitar, adelantar obras y ejercer vigilancia en esos predios. **Lo anterior sin desconocer el derecho de propiedad que reside en cabeza del propietario del predio afectado a quien se le señala el derecho de indemnización por daños, incomodidades o afectaciones y en general los perjuicios que pueda sufrir, en los términos establecidos en la Ley 56 de 1981.***

Sobre el entendimiento que debe darse a las normas comendadas del régimen de servicios públicos, esta Oficina ha manifestado lo siguiente⁽³⁾:

*“...los prestadores deben acudir a la jurisdicción ordinaria para que sea el juez quien imponga la servidumbre y establezca **las obligaciones e indemnizaciones a que haya lugar o solicitar la imposición de la misma, en sede administrativa, por parte de las entidades territoriales, en los términos antes señalados.***

*Así las cosas, las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden promover la constitución de servidumbres y desarrollar todas las actividades antes mencionadas para la prestación de los mismos, **pero tal facultad no es absoluta, en tanto deben respetar los derechos de los propietarios de los inmuebles afectados y asumen responsabilidad por sus actuaciones.***

Para concluir se puede decir que los propietarios de los inmuebles afectados con las servidumbres requeridas para la prestación de los servicios públicos pueden acceder o no a ellas, caso este último en el que procederá su imposición administrativa o judicial

*por razones de interés público, **pero no están obligados a renunciar a la indemnización a que tienen derecho legal por las incomodidades y perjuicios que les sean ocasionados.*** (Cursiva, subrayado y negrilla fuera del texto original).

Concluye la Superintendencia de Servicios Públicos, que si bien es cierto la constitución y la ley colombiana permiten que las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios impongan servidumbres en predios privados, más, esto no quiere decir que los daños y los perjuicios que se causen al bien inmueble por acción u omisión por la prestadora de servicios domiciliarios estén a cargo de los propietarios, muy al contrario, las entidades están en la OBLIGACIÓN, de resarcir e indemnizar por las ***afectaciones, incomodidades y perjuicios*** causados por las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.

Por su parte el artículo 923 del Código civil Colombiano, indica: “**ARTICULO 923. <DERECHOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO SIRVIENTE>**. *El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le pague el precio de todo el terreno que fuere ocupado por el acueducto; el de un espacio a cada uno de los costados, que no bajará de un metro de anchura en toda la extensión de su curso, y podrá ser mayor por convenio de las partes, o por disposición del juez, cuando las circunstancias lo exigieren; y un diez por ciento más sobre la suma total. Tendrá, además, derecho para que se le indemnice de todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto y por sus filtraciones y derrames que puedan imputarse a defectos de construcción.*”

Al respecto, la Ley 142 de 1994, consagra en cuanto a dicha norma define en su artículo 14 numeral 14.22. “**SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO**. *Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.*”

Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas”.

Analizando el marco legal, se puede llegar a la conclusión, conforme se encuentra examinada la responsabilidad del estado (empresa de acueducto ACUAVALLE S.A. E.S.P.) y municipio de ALCALA VALLE, como entes a cargo de la ocasión del daño, se podría concluir que por omisión en el mantenimiento de las redes de acueducto que atraviesa la propiedad de los convocantes, se dieron los daños y posteriores perjuicios de los propietarios del predio sirviente, esto, sin desligar desde ya, la responsabilidad del municipio de Alcalá Valle, en cuanto a su responsabilidad y vigilancia frente a la prestación del servicio de acueducto, tal

como lo indica la Ley 142 de 1994, donde se deja clara la responsabilidad del estado.

No existe duda que en el presente caso se acredita la existencia del daño y que consiste en los perjuicios causados a mis representados y a su patrimonio material, como en su esfera moral; gastos que ocasiona la mitigación del riesgo que se encuentra creado, pérdida del terreno que no se puede usar ni explotar con fines comerciales, como si ocurría antes del incidente en comento, lo que da origen a esta reclamación por perjuicios de lucro cesante consolidado, daño emergente y gastos de mitigación del riesgo actual.

En primer lugar, respecto de la imputabilidad del hecho y existencia del nexo de causalidad frente a la presunta responsabilidad de la empresa ACUAVALLE S.A. E.S.P. y del municipio de ALCALA VALLE, se debe sostener que se encuentra probado documentalmente, tanto el contrato de concesión con el municipio y la aludida empresa, así como Igualmente, que del material probatorio allegado resulta evidente la falla del servicio, la presencia de defectos físicos presentados en las redes de acueducto que ocasionó el incidente que afecto a mis patrocinados en fecha 22 de agosto de 2020. Así las cosas, se observa que la aludida falla en el servicio es atribuible a la empresa y municipio en mención, por ser los obligados contractualmente a efectuar las labores de mantenimiento de un lado y por el otro la verificación del efectivo cumplimiento de las aludidas obligaciones de mantenimiento preventivo, mejora y expansión de los servicios de acueducto, conforme a sus obligaciones legales y contractuales.

COMPETENCIA

Es usted, señor juez y/ procurador, competente para conocer de éste trámite de conformidad a lo prescrito en el numeral 7 del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011. Además de lo indicado en la ley 23 del 1991, Decretos 171 y 173 de 1993, ley 446 de 1998, Decreto 1716 de 2009 y el capítulo 3 de la sección 1 del Decreto Único Reglamentario 1069 del 2015.

CUANTÍA

La cuantía de la demanda se estima en CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (**\$150.000.000.00**), suma reclamada correspondiente a los perjuicios materiales causados en las modalidades de lucro cesante, daño emergente y costos de obras de mitigación del riesgo y compensación por imposición de servidumbre.

JURAMENTO

Conforme el literal h del artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015 y el artículo 206 del Código General del Proceso, mis poderdantes y el suscrito, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la estimación razonada de la cuantía es objetiva de acuerdo con la normatividad vigente. De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que no hemos presentado, hasta la fecha, parecida solicitud ante la justicia contenciosa administrativa, con identidad de violación, hechos y derechos reclamados en la de la referencia.

PRUEBAS Y ANEXOS

- a) Certificación de existencia y representación Legal de la convocada.
- b) Certificado de tradición del inmueble.
- c) Copia del dictamen pericial realizado por el ingeniero ALFREDO ALVAREZ LÓPEZ, de fecha 18 de abril de 2021.
- d) Poderes para actuar
- e) Concepto Técnico del ingeniero ambiental Gustavo Adolfo Vélez Solano. De fecha 20 de agosto de 2020.
- f) Concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Carlos Alberto Villamil Moreno, de fecha 16 de diciembre de 2020.
- g) Concepto del Técnico operativo del municipio de Alcalá Valle, Luis Danilo Aguilar Isaza, de fecha 17 de septiembre de 2020.
- h) Respuesta documentada de la CVC de fecha 18 de septiembre de 2020.
- i) Derecho de petición enviada a Acuavalle S.A.-E.S. P de Alcalá, Valle, del 10 de junio de 2021.

NOTIFICACIONES

CONVOCANTES:

Dirección: Carrera 11 No. 12 Norte -60 Edificio Torre Alicante

Teléfono: 315 476 3112

Email:

Iván Vélez Villegas

ivanvelez0519@gmail.com

Mauricio Vélez Villegas

mauriciovelez@hotmail.com

Mauricio.velez@intel.com

Rubén Darío Vélez Villegas

rubendariovelezvillegas@gmail.com

APODERADO:

Dirección: Calle 21 número 16 – 46 Edificio Torre Colseguros oficina 605 de la ciudad de Armenia Q.

Celular 311 608 0197

Email: leonardolopez0217@gmail.com
susolucionlaboral.net@gmail.com

CONVOCADOS:

**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE
DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. – E.S.P.**

Dirección: AV 5 No. 23 A Norte – 41 Cali –Valle.

Celular: 312 786 8258

Email: acuavalle@acuavalle.gov.co

MUNICIPIO DE ALCALA VALLE:

Dirección: Carrera 8 # 5 - 35

Teléfonos: 57+2+2004171

Email: contactenos@alcala-valle.gov.co
despacho@alcala-valle.gov.co

Del señor procurador,

LEONARDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

C.C. 18.496.999 de Armenia Q.

T.P. 151.551 del C.S.J.